

Recortes y rescates

Joaquín
Arriola

Profesor de Economía Política EHU/UPV

Los gobiernos de la Unión Europea han acordado que la crisis económica hay que enfrentarla con una política monetaria laxa o procíclica, a base bajos tipos de interés, y una política fiscal dura o anticíclica, a base de ajuste y limitación constitucional del déficit presupuestario. En consecuencia, los bancos, que reciben financiación de ese organismo autónomo de los estados que es el Banco Central, obtienen crédito barato. Pero a diferencia de otras coyunturas, ese crédito no lo utilizan los bancos para conceder crédito a la inversión y al consumo, sino para sanear sus balances comprando deuda pública, es decir, garantizada por el Estado.

Por su parte, el Estado, en este caso el español, ha decidido que en 2012 tiene que reducir el déficit de las administraciones públicas en el equivalente a un 3,2% del PIB, lo que significa que, con una previsión de incremento de ingresos de 12.300 millones de euros, el gasto se va a contraer en unos 18.000 millones de euros. Es decir, las empresas que venden bienes y servicios al estado y los ciudadanos que trabajan en y reciben transferencias de las administraciones públicas, verán mermada la contribución del estado a sus ingresos y al empleo.

Esos 18.000 millones de euros de recorte, de los que unos 4.200 proceden de los presupuestos de la administración central, representan una pérdida de unos 300.000 empleos directos e indirectos.

Estos datos iniciales plantean con claridad el orden de prioridades en materia de lucha contra la crisis económica: el objetivo principal de toda la estrategia montada en el pacto por el euro plus y las políticas de ajuste derivadas del mismo es garantizar la supervivencia del sistema financiero privado, a pesar de que la crisis ha puesto en evidencia la total ineficacia del mercado libre para gestionar el crédito internacional a favor de la producción y el crecimiento eco-

nómico. El equilibrio presupuestario tiene como objetivo principal, en el consenso europlusista entre conservadores y social-liberales, limitar la demanda de crédito del sector público para facilitar el acceso al mismo al sector privado, en la creencia de que el aumento de la deuda pública empuja fuera del mercado de crédito a la deuda privada (creencia que no deja de ser menos mítica porque se la denomina con un término inglés algo tenebroso: crowding out).

El sector conservador de la política del consenso aprovecha además los ajustes para avanzar en el desmantelamiento de los servicios sociales universales. En repetidas ocasiones se ha oído a representantes tanto del ala tecnocrática del PP (Cristóbal Montoro) como del ala nacional-católica (Esperanza Aguirre) insistir en que los servicios sociales públicos deberían servir para atender a los sectores de la población "que más lo necesitan". Es la concepción asistencial de los servicios públicos propia de los neoliberales, quienes creen que es a través del mercado como los ciudadanos "normales" tienen que resolver todas sus necesidades que impliquen trabajo ajeno, incluidas las educativas y de salud, y llegado el caso, porque no, las de seguridad o justicia.

El desempleo de una parte creciente de la fuerza de trabajo hace tiempo que dejó de ser considerado un problema económico por los partidarios del consenso, para ser tratado como un problema social, que se gestiona fundamentalmente a través de las políticas educativas y de orden público. El único tratamiento económico permitido del problema es en términos de precios, conforme a la ideología económica vulgar que imagina que solamente una reducción suficientemente grande y sostenida en el tiempo del precio (salario) puede hacer aumentar la demanda (empleo) hasta vaciar el mercado (desempleo).

La alternativa a esta situación pasa por restablecer el orden de prioridades, situando el trabajo y la creación de valor como prioridad máxima. Pero esto implica un cambio radical en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, hasta revertir el

dominio de los consejos de administración sobre los consejos de ministros, y en todo caso, resulta incompatible con el mantenimiento del sistema de crédito en manos privadas. Mientras no se llegue a este convencimiento, y se pretenda compatibilizar como desde el social-liberalismo ajuste y creci-

miento, o como desde la izquierda de la izquierda, una banca pública de fomento con un mercado de crédito privado, o querer hacer compatible una política fiscal expansiva con la estabilidad monetaria de la zona euro, las propuestas de la izquierda sonarán a vana e inerte retórica. ■

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS PARA 2012 RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO

Políticas	Presupuesto inicial 2011 (1)	(%)	Presupuesto inicial 2012 (2)	(%)	Δ (%) (2)/(1)
Justicia	1.713,25	0,5	1.612,63	0,5	-5,9
Defensa	6.868,20	2,2	6.261,32	2,0	-8,8
Seguridad ciudadana e Instit. Penitenciarias	8.401,96	2,7	8.354,91	2,7	-0,6
Política exterior	2.747,73	0,9	1.680,15	0,5	-38,9
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	19.731,14	6,2	17.909,01	5,7	-9,2
Pensiones	112.215,76	35,5	115.825,93	37,1	3,2
Otras prestaciones económicas	13.576,36	4,3	12.014,49	3,9	-11,5
Servicios sociales y promoción social	2.513,48	0,8	2.119,04	0,7	-15,7
Fomento del empleo	7.329,10	2,3	5.764,74	1,8	-21,3
Desempleo	30.474,06	9,6	28.805,05	9,2	-5,5
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	1.200,18	0,4	820,11	0,3	-31,7
Gestión y Administración de la Seguridad Social	7.770,59	2,5	2.901,12	0,9	-62,7
(1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	175.079,53	55,4	168.250,49	54,0	-3,9
Sanidad	4.263,58	1,3	3.974,62	1,3	-6,8
Educación	2.843,43	0,9	2.220,19	0,7	-21,9
Cultura	1.103,99	0,3	937,40	0,3	-15,1
(2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	8.211,00	2,6	7.132,22	2,3	-13,1
GASTO SOCIAL (1) + (2)	183.290,53	58,0	175.382,70	56,2	-4,3
Agricultura, pesca y alimentación	8.575,09	2,7	8.510,63	2,7	-0,8
Industria y energía	2.800,81	0,9	1.897,06	0,6	-32,3
Comercio, turismo y PYME	1.432,94	0,5	1.109,92	0,4	-22,5
Subvenciones al transporte	1.618,72	0,5	1.614,30	0,5	-0,3
Infraestructuras	8.859,07	2,8	6.897,94	2,2	-22,1
Investigación, Desarrollo e Innovación Civil	7.576,45	2,4	5.633,22	1,8	-25,6
Investigación, Desarrollo e Innovación Militar	1.009,29	0,3	757,68	0,2	-24,9
Otras actuaciones de carácter económico	808,33	0,3	709,06	0,2	-12,3
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	32.680,71	10,3	27.129,82	8,7	-17,0
Alta dirección	654,38	0,2	633,35	0,2	-3,2
Servicios de carácter general	8.014,25	2,5	7.000,03	2,2	-12,7
Administración financiera y tributaria	1.409,33	0,4	5.237,53	1,7	271,6
Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811,18	13,5	49.685,40	15,9	16,1
Deuda Pública	27.400,00	8,7	28.848,00	9,3	5,3
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	80.289,14	25,4	91.404,32	29,3	13,8
TOTAL CAPITULOS I A VIII	315.991,53	100,0	311.825,85	100,0	-1,3
TOTAL CAPITULOS I A VIII Excluidos sistemas de financiación AATT	287.957,67	91,1	275.336,54	88,3	-4,4

Siguen los ataques a los derechos y a los pilares del Estado Social

Salce
Elvira

Sec. Confederal de I+D+I de CC.OO

El Gobierno del PP, ha presentado los PGE-12 retrasándolos sin justificación alguna, a la espera de que pasaran las elecciones en Andalucía y Asturias, en una acción más de engaño, mentira y funambulismo político, estrategia que no les ha salido bien. Además del gran recorte en el primer borrador, cada día nos sorprenden con nuevas informaciones que suponen un saqueo aún mayor de los servicios públicos, con 10.000 millones menos para los pilares del estado social: educación y sanidad.

Nada les es suficiente a los mercados y al Gobierno, que opera en su nombre y a su servicio. Unido a los ataques sociales se incluye, con el argumento de aumentar los ingresos, la llamada "regularización de capitales" que no es otra cosa que amnistía fiscal a los defraudadores, una terrible injusticia para los que pagamos los impuestos rigurosamente, porque ya se encargan

de detraernos el IRPF de la nómina, renunciando el estado a perseguir a los estafadores y a los que incumplen las leyes.

Tampoco abordan seriamente el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas -aquellas que facturan más de 1000 millones al año- que como reconoce el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar realmente al 16,88%, mucho menos que cualquier persona trabajadora con un sueldo de miseria.

El desmantelar la educación y la sanidad pública, como se pretende con estos recortes nos llevará, si no lo frenamos, a destruir las conquistas de decenas de años de lucha amén de destrozar el futuro de millones de personas engordando el sector privado. También estos presupuestos, acaban con la solidaridad internacional, al prácticamente eliminar la cooperación al desarrollo. Otras políticas tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo, con más de cinco millones de parados, desaparecen por completo.

Asimismo los recortes del 25% en la partida de Investigación, Desarrollo e Inno-

vación, al que hay que sumar los de los dos últimos años, son un ataque letal a la ciencia española con el mayor retroceso de la historia de la democracia. Estos recortes condenan a la casi paralización al sector público de investigación, castigando sin paliativos al principal impulsor de la I+D+i en España y separándonos aún más de la media europea en relación al PIB. Si se consume esta situación, el resultado será desolador e irrecuperable, pues supone la paralización de proyectos de investigación estratégicos y la condena a la precariedad permanente o al exilio interior o exterior de la generación de jóvenes científicos, tecnólogos y personal de apoyo, mejor formada de la historia de España.

Una de las causas fundamentales de que la crisis se haya manifestado más intensamente en nuestro país, dejándose sentir especialmente en la destrucción masiva de empleo, es debido a que nuestra economía esta basada en mucha mayor medida que la de los países de nuestro entorno en sectores de bajo valor añadido, que utilizan mano de obra poco cualificada, con salarios bajos y precarizados como

única forma de competir, en lugar de utilizar la innovación y el conocimiento y esta parece ser será la tónica de actuación del gobierno del PP, como lo demuestra la actual Reforma Laboral, que ya está haciendo estragos entre los trabajadores y trabajadoras.

En definitiva, estas tremendas agresiones, que no parecen vayan a ser las últimas, suponen más sufrimiento y exclusión social para las rentas más bajas y los colectivos más desfavorecidos, millones de personas, sin que solucionen ninguno de los problemas que intentan arreglar: van a reducir el crecimiento y destruir miles de empresas y de empleo, agudizando la recesión.

Pero no podemos caer en el derrotismo y la desesperanza, es hora de seguir peleando, como lo ha demostrado el éxito de la Huelga General del 29 de Marzo y las impresionantes manifestaciones que la siguieron y convencer a la ciudadanía de que es posible otra política al servicio de la mayoría. Hemos de recuperar el orgullo de clase y construir alianzas amplias con objetivos comunes de cambio de modelo económico y social. ■